



Revista IUSTA

ISSN: 1900-0448

revistaiusta@usantotomas.edu.co

Universidad Santo Tomás

Colombia

PIZARRO LEONGÓMEZ, EDUARDO

Una luz al final del túnel. Balance estratégico del conflicto armado en Colombia

Revista IUSTA, vol. 2, núm. 24, julio-diciembre, 2005, pp. 93-101

Universidad Santo Tomás

Bogotá, Colombia

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=560358682007>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Una luz al final del túnel. Balance estratégico del conflicto armado en Colombia*

EDUARDO PIZARRO LEONGÓMEZ**

El final del conflicto armado en Colombia ya se vislumbra en el horizonte. Al complejo y difícil proceso de negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se añade ahora el inicio de las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Más temprano que tarde, va a ocurrir lo mismo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Tanto el tiempo internacional como el tiempo nacional corren en contravía de los actores armados no estatales. Las AUC, las FARC y el ELN están sufriendo, a su vez, un creciente aislamiento internacional, un progresivo repudio de la opinión pública interna y un dramático debilitamiento de su capacidad militar.

La guerra cada día tiene menos cabida en el mundo. Las cifras son contundentes. De acuerdo con el

reciente informe del *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI)¹, en 2003 hubo en el mundo un total de 19 conflictos armados mayores (es decir, en los cuales se producen más de 1.000 muertes a consecuencia del conflicto por año) en 18 países a lo largo del mundo. Esta es la cifra más baja, con la sola excepción de 1997, en que hubo 18 conflictos, desde el fin de la guerra fría en 1989. Solo dos confrontaciones (la de India y Pakistán por la región musulmana de Casimir y la guerra en Irak) fueron, propiamente, inter-estatales. El resto son inter-interestatales: 4 en África, 14 en Asia y uno en América Latina: el de Colombia.

Esta disminución de los conflictos armados en el mundo -la mayor parte de los cuales fueron resueltos por la vía de la negociación política con media-

* El presente trabajo contiene las ideas centrales de su autor expuestas en la Catedra Fray Bartolomé de las Casas y fue cedido por él para la Revista IUSTA.

** Sociólogo de la Universidad de París, actualmente es profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia y columnista del diario *El Tiempo*.

1 SIPRI Yearbook 2004: *Armaments, Disarmament and International Security*. Oxford: Oxford University Press, 2004, en especial el capítulo 3, "Major Armed Conflicts", redactado por Renata Dwan y Micaela Gustavsson.

ción internacional-, es una fuente de optimismo para Colombia. Existe, sin embargo, un hecho preocupante: como han mostrado diversos estudios internacionales de carácter comparativo, la mayor parte de los conflictos de envergadura que persisten en el mundo tienen largos años de duración. La mayoría repuntaron poco antes de la caída del Muro de Berlín y, en algunos casos (Israel-Palestina, India-Pakistán, Burma, Colombia, etc.) llevan varias décadas. Estos “enfrentamientos prolongados” son, de acuerdo con la experiencia internacional, los más difíciles de erradicar debido a los odios acumulados, la dinámica perversa de las represalias y contrarrepresalias y, sobre todo, a la desconfianza mutua entre actores y comunidades². La guerra entre Israel y Palestina es, desde este punto de vista, un caso paradigmático. Una situación similar se presenta en Colombia.

Sin embargo, al igual que otros conflictos de larga duración como los de Angola o Sri Lanka, todo apunta a que en Colombia, lejos de agravarse la guerra armada interna, ésta tiende también a su solución final. Todos los índices del país presentan en los últimos dos años una mejoría sustancial. Se ha fortalecido la seguridad pública (el número de acciones guerrilleras y paramilitares ha disminuido de manera sustancial) y la seguridad ciudadana (el número de homicidios, la tasa de secuestros y otros delitos similares han caído notablemente) y, además, existe un mejoramiento significativo en el campo de los derechos humanos. La agonía puede llegar a ser, no obstante, larga, dolorosa y, en muchas ocasiones, brutal.

Hacia un “punto de inflexión”

En Colombia el debate en torno al actual balance estratégico del conflicto armado muestra una diversidad de perspectivas, abiertamente encontradas. Por una parte, el conocido columnista del diario *El Tiempo* y director de la Fundación Seguridad y Democracia, Alfredo Rangel, plantea que las FARC -ante la ofensiva de las Fuerzas Armadas- se hallan replegadas en la selva profunda, intactas en su aparato militar y a la espera del desgaste de la política de Seguridad Democrática de Uribe Vélez, para retomar la iniciativa militar. Por otra parte, el Ministerio de Defensa plantea, por el contrario, que tanto las FARC como el ELN están sufriendo un debilitamiento estratégico severo, razón por la cual su derrota militar es solamente una cuestión de tiempo³.

Nuestra perspectiva difiere de las dos anteriores⁴. Rangel comete un grave error analítico al minimizar el debilitamiento estratégico de los grupos guerrilleros, en particular de las FARC. El Ministerio de Defensa sostiene una visión triunfalista que, dado el carácter prolongado del conflicto colombiano y sus eternos vaivenes, es, a todas luces, inapropiada. Sin duda, el conflicto en Colombia ha entrado en una “etapa de inflexión” en detrimento de los actores armados no estatales, pero la solución final sólo será viable si el Estado colombiano puede garantizar la sostenibilidad financiera, política y social del proyecto de Seguridad Democrática, manteniendo y fortaleciendo el Estado de Derecho y, ante todo, comprometiendo a la comunidad internacio-

2 LICKLIDER, Roy (ed.). *Stopping the Killing. How Civil War End*. Nueva York: New York University Press, 1993. La disminución de la guerra se acompaña, sin embargo, de un acrecentamiento del terrorismo a nivel mundial mediante redes clandestinas. La llamada *Netwar*.

3 Por derrota militar no entiende el Ministerio de Defensa un aplastamiento total de los grupos guerrilleros como ocurrió con los Montoneros en Argentina o los Tupamaros en Uruguay. Por derrota se entiende un debilitamiento estratégico que los lleve a la convicción de la imposibilidad de acceder al poder por la vía armada, a la idea de haber entrado en una etapa de desgaste irreversible y, por tanto, a la convicción de la negociación como única opción viable. Desde esta perspectiva, el Ministerio de Defensa sostiene que antes del año 2006 los grupos irregulares de derecha e izquierda estarán todos sentados en la mesa de negociación.

4 Cf. PIZARRO, Eduardo. *Una democracia asediada. Balance y perspectivas del conflicto armado en Colombia*. Bogotá: Norma, 2004.

nal en la búsqueda de la solución negociada final de la guerra interna. Si esta sostenibilidad no está plenamente garantizada, la agonía va a ser larga y traumática.

Nuestro argumento central a favor de la idea de un “punto de inflexión” en menoscabo de los actores armados no estatales se funda en la baja sostenibilidad de la guerra interna para estos grupos. Tanto el tiempo internacional como el tiempo nacional corren en su contra.

“Cero tolerancia”

En el plano externo, tras los atentados terroristas de Al Qaeda en Nueva York y Washington el 11 de septiembre de 2001, existe a nivel mundial un clima de “cero tolerancia” hacia la violencia como recurso de acción política. Este clima se vio reforzado tras el ataque terrorista en Madrid el 11 de marzo de 2004. Es más: el empañamiento de Estados Unidos en Irak le ha asestado un duro golpe al belicismo unilateral de la Casa Blanca. El “síndrome de Vietnam” ha revivido en la opinión pública estadounidense y la aceptación de George Bush en las encuestas muestra una tendencia decreciente pronunciada. La renuncia del director de la CIA, George Tenet, puede marcar el principio del fin de la facción neoconservadora que ha regido los destinos de Washington en los últimos cuatro años.

Estos cambios en el panorama internacional están teniendo un hondo impacto en el conflicto colombiano. No sólo las FARC, el ELN y las AUC han sido incorporados en las listas de grupos considerados como terroristas del Departamento de Estado estadounidense y de la Unión Europea, sino que una parte de sus cúpulas dirigentes están siendo solici-

tadas en extradición por Washington debido al tráfico de drogas. Es más: en un reciente informe de la influyente RAND Corporation se sitúa a las FARC al lado de Al Qaeda y Hizbollah como uno de los tres grupos terroristas más amenazantes para la seguridad de los Estados Unidos. “Estos tres grupos, sostiene el informe, han demostrado los más altos niveles de hostilidad hacia los Estados Unidos y la más alta capacidad para llevar a cabo ataques sofisticados”⁵.

La sostenibilidad financiera de la guerra

Frente a este nuevo panorama internacional, los riesgos para los grupos guerrilleros colombianos son simple y llanamente dramáticos. Tras el final de la guerra fría y el agotamiento del apoyo financiero de los actores armados por parte de las grandes potencias, sólo han podido subsistir aquellos conflictos en los cuales existen suficientes recursos internos para el sostenimiento de la dinámica militar⁶.

En Colombia, el secuestro y el tráfico de drogas se han convertido en los dos principales combustibles del conflicto interno. Pero estas dos posibilidades constituyen un verdadero regalo envenenado para los grupos irregulares. Si estos continúan financiando la guerra mediante el secuestro, se acercan al Tribunal Penal Internacional de La Haya que está juzgando los crímenes de lesa humanidad perpetrados en la antigua Yugoslavia y Ruanda y, muy pronto, en el resto del mundo. Si la siguen financiando mediante el tráfico de drogas se arriesgan a ser extraditados hacia los Estados Unidos. Es decir, el financiamiento de la guerra interna se está convirtiendo en un verdadero cuello de botella para la guerrilla, cuyo proyecto militar muestra desde esta perspectiva una precaria sostenibilidad.

5 CRAGIN, Klim y DALY, Sara. *The Dynamic Terrorist Threat. An Assessment of Group Motivations and Capabilities in a Changing World*. Santa Mónica: Rand Corporation, 2004, p. 13.

6 RUFIN, Jean-Christophe y JEAN, François (eds.). *Les économies de guerre dans les conflits internes*. París: Hachette, 1996. Igualmente, COLLIER, Paul y HOEFFLER, Anke. *Greed and Grievance in Civil War*. Development Research Group, Banco Mundial, 2001.

Debilitamiento estratégico

En el plano interno, el fortalecimiento de las instituciones militares y de policía en los últimos años gracias a un hondo esfuerzo financiero del Estado, aunado al polémico Plan Colombia (que ha convertido a este país en el tercer receptor mundial de ayuda militar estadounidense después de Israel y Egipto), han puesto en evidencia hasta la saciedad la inutilidad de la violencia como mecanismo para acceder al poder. Día a día, el debilitamiento estratégico de las FARC y el ELN se hace más y más palpable. Estos grupos insurgentes han perdido importantes cuadros de dirección, territorios que se hallaban bajo su control desde tiempos inmemoriales, corredores estratégicos y centenares y centenares de militantes que se han acogido a las políticas que agencia el Estado de reinserción individual. Más de 3.000 combatientes en los últimos dos años. Se trata de un debilitamiento difícilmente reversible por cuanto estas políticas de orden y seguridad tienen un fuerte respaldo ciudadano. Los colombianos repudian sin titubeos la guerra. La hora del “guerrillero heroico”, que hace años pasó en América Latina, ya comenzó también su cuenta regresiva en Colombia.

¿Es verificable empíricamente este debilitamiento estratégico? Jorge Restrepo y Michael Spagat en el Departamento de Economía del Royal Holloway Collage de la Universidad de Londres han desarrollado la primera base de datos (fechas, lugares, actores envueltos, tipos de ataque, número de víctimas, etc.) sobre el conflicto colombiano basada en una serie de tiempo largo (18 años)⁷. Sus principales conclusiones se podrían resumir así: primero, en los últimos dos años las acciones armadas de los grupos guerrilleros y paramilitares han disminuido de manera significativa; segundo, los combates entre la fuerza pública y los grupos

paramilitares han aumentado considerablemente; tercero, en los enfrentamientos entre la fuerza pública y los actores armados no estatales, éstos están llevando la peor parte.

Estos cambios internos y externos están teniendo un hondo impacto en la dinámica del conflicto armado. Por una parte, en cuanto hace a las AUC, la reconstrucción del Estado y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y de Policía ha disminuido la dependencia estratégica hacia estos movimientos criminales para sostener el orden público. Hoy, el apoyo abierto o soterrado a estos grupos por parte de distintos segmentos de las élites civiles o militares es más oneroso -dados los costos internacionales para la imagen estatal-, que buscar su desaparición, ya sea mediante la vía negociada o mediante la vía militar. Por otra parte, en relación con los grupos guerrilleros, éstos han ido perdiendo la iniciativa militar y se encuentran enfrentados a un mundo crecientemente hostil a sus prácticas reprobables. Ni política ni militarmente la guerrilla significa en la actualidad un desafío real para las instituciones políticas.

¿Solución militar o política?

En Colombia pocos creen en las posibilidades reales de una solución exclusivamente militar a la guerra interna. La extensión y la complejidad del territorio, la extrema dispersión de los focos de enfrentamientos, la alta porosidad de las fronteras tanto terrestres como marítimas y la existencia de amplios recursos para el financiamiento de los grupos armados (en particular las drogas ilícitas y la industria del secuestro) hacen muy improbable una salida por la vía militar. Sin duda, el fortalecimiento del Estado ha constituido un factor determinante para gestar un nuevo escenario favorable para acabar el conflicto armado. Pero, tarde o temprano, su

7 RESTREPO, Jorge y SPAGAT, Michael, *The Colombian Conflict: Uribe's First 17 Months*. Londres: University of London, 2004 (documento inédito).

desenlace final va a tener como escenario la mesa de negociación, en la que será indispensable una fuerte presencia de la comunidad internacional.

¿Es realista pensar que estas negociaciones arranquen bajo el actual gobierno de Álvaro Uribe, catalogado en múltiples círculos nacionales e internacionales como un mandatario de la derecha militarista? Todo parece indicar que sí, tanto si nos atenemos a la experiencia de América Latina como al curso actual de los acontecimientos en el país.

En efecto, la gran paradoja en el continente, tal como lo muestran las experiencias en El Salvador y Guatemala, es que los gobiernos de derecha han sido más aptos para llevar a cabo negociaciones exitosas que los gobiernos de centro o de centro-izquierda. Tanto en El Salvador como en Guatemala los procesos de paz se iniciaron o activaron bajo gobiernos de centro. En el primer caso, este debut tuvo lugar bajo las orientaciones del presidente José Napoleón Duarte (1984-1989), miembro fundador del Partido Social Cristiano de centro reformista. En Guatemala, el proceso de negociación sufrió un serio impulso bajo el mandato del ex-Procurador de los Derechos Humanos, Ramiro de León Carpio (1993-1996), quien se posesionó en la presidencia tras la caída de Jorge Serrano Elías, sustituido tras llevar a cabo un auto-golpe de Estado en 1993 al cerrar el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. Pero, ni Duarte ni Carpio pudieron sellar la paz.

En El Salvador, la firma de los acuerdos de paz fue refrendada entre el gobierno de Alfredo Cristiani y el FMLN en presencia de Naciones Unidas, en el Castillo de Chapultepec, en la ciudad de México, el 16 de enero de 1992. El hecho impactante es que haya sido un presidente electo bajo las banderas del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), fundada por el tenebroso mayor del Ejército, Roberto D'Aubuisson Arrieta, quien estampara su firma en los acuerdos de paz. Atrás quedaron 12 años de guerra, 75.000 muertos y cientos de miles de exiliados y refugiados.

En Guatemala, la firma de los acuerdos de paz con la URNG se llevó a cabo el 26 de diciembre de 1996 bajo el mandato del presidente Álvaro Arzu Irigoyen (1996-2000), líder del Partido de Avanzada Nacional de la derecha empresarial moderada. Con la elección de Arzú el 14 de enero de 1996, el proceso de paz avanzó de manera acelerada. En mayo de 1996 se suscribe el "Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria" y, unos meses después, se arriba a otro de los acuerdos sustantivos: el de «Fortalecimiento del poder civil y función del Ejército en una sociedad democrática». Finalmente, llega el momento más esperado de todo este proceso. El 29 de diciembre de 1996, cuando Arzú, la comandancia guerrillera de la URNG y Jean Arnault, el moderador de Naciones Unidas, decretan mediante una firma el fin del enfrentamiento armado que duró más de tres décadas.

¿Cómo explicar este fenómeno? A mi modo de ver, un presidente de derecha moderada constituye un interlocutor creíble para los movimientos insurgentes, en la medida en que dispone de amplios de recursos de poder, pues puede garantizar la cohesión del Estado para las negociaciones y es, por tanto, previsible en sus acciones y claro en sus objetivos. Por el contrario, presidentes de centro o centro-izquierda generan escepticismo en las propias filas gubernamentales y en sectores extremistas de las fuerzas de seguridad, quienes buscan sabotear los esfuerzos de paz. En las élites conservadoras colombianas nadie cree que Uribe pueda llevar a cabo pactos secretos con la guerrilla en detrimento de sus intereses. De ahí la cohesión estatal que no existió ni bajo Ernesto Samper (1994-1998), ni bajo Andrés Pastrana (1998-2002).

Se trata, pues, de una gran paradoja. En medio del escepticismo general, lentamente se está abriendo paso un proceso de paz con las AUC y el ELN y, más temprano que tarde, todo indica que ocurrirá lo mismo con las FARC.

La suerte de los actores armados

Las Autodefensas Unidas de Colombia

Las AUC se han convertido en un fenómeno sin antecedentes en América Latina. Si inicialmente las AUC parecían asimilarse a otras experiencias latinoamericanas como las Patrullas Armadas Campesinas de Guatemala (PAC) o a los Comités de Autodefensa Civil (CAD) o Rondas Campesinas del Perú, poco a poco debido a sus vínculos profundos con el tráfico de drogas se han transformado en típicos “señores de la guerra”, similares en su características básicas con aquellos que pululan en Afganistán, Irak o Sierra Leona. Stergios Skaperdas sostiene que “el término ‘señor de la guerra’ se refiere a personajes poderosos (*strongmen*) que no obedecen órdenes de las altas autoridades centrales y controlan una región gracias a su capacidad para desarrollar la guerra. El poder de los *warlords* y su capacidad para acorralar a las frágiles autoridades y a los grupos competidores depende en buena medida de una economía de guerra, la cual a menudo incluye su integración a las redes de comercio internacional”⁸.

De ahí la enorme complejidad del proceso de negociación que se ha abierto con este controvertido movimiento, cuyas raíces políticas de carácter contrainsurgente han dado paso a “empresarios de la coerción”⁹, es decir, a movimientos que a cambio de extorsión venden seguridad regional y a la vez se enriquecen con el tráfico de drogas.

En la opinión pública colombiana existe un agudo debate en torno al carácter de las conversaciones que se desarrollan con las AUC: para algunos, dado

el carácter de este movimiento cuasi-delincuencial, sólo es posible desarrollar unos diálogos tendientes a su sometimiento a la justicia, tal como ocurrió con Pablo Escobar durante el gobierno de César Gaviria. Para otros, teniendo en cuenta el origen contrainsurgente de esta agrupación, es indispensable darle un carácter político a las negociaciones, similares a las que se han dado en el pasado con grupos guerrilleros tales como el M-19 o el EPL. Este último es el planteamiento básico de la cúpula paramilitar.

El gobierno actual, para eludir este intrincado debate, reformó la ley que exigía un reconocimiento previo a un actor armado como actor político para poder entrar en un proceso de negociación. El artículo 3 (parágrafo 1) de la Ley 782 de 2002 dice, al respecto, lo siguiente: “De conformidad con las normas del Derecho Internacional Humanitario, y para los efectos de la presente ley, se entiende por grupo armado al margen de la ley, aquel que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”¹⁰. Mediante este subterfugio jurídico, el gobierno buscó superar un hondo escollo existente en la tradición jurídica del país, la cual planteaba que sólo era posible negociar con grupos rebeldes y jamás con grupos defensores a ultranza del statu quo.

¿Por qué negocian los líderes paramilitares? Existen al menos tres razones convergentes. En primer lugar, debido a la solicitud de extradición por narcotráfico y terrorismo a la cúpula de las AUC por parte de Washington, éstos líderes creen que podrán negociar su no extradición a cambio de la

8 “Warlord Competition”. En: Journal of Peace Research, V. 39, No. 4, 2002, p. 575.

9 Véase el trabajo de ROMERO, Mauricio. *Paramilitares y autodefensas 1982-2003*. Bogotá: IEPRI/Editorial Planeta, 2003, p. 17.

10 Uno de los cuellos de botella para un eventual proceso de negociación con las AUC era la imposibilidad de llevar a cabo conversaciones con un grupo no rebelde, es decir, que no encajaba propiamente en la categoría de delincuente político. Para sortear este obstáculo el gobierno de Uribe reformó la ley 418 de 1997 (que, a su turno, había sido prorrogada y modificada mediante la ley 548 de 1999), al permitir negociaciones con cualquier grupo armado al margen de la ley. Es decir, ya no es necesario, como en el pasado, darle una categoría de actor político a un actor armado para negociar. Con lo cual se elude el complicado tema de darle un status político a los grupos paramilitares, lo cual tenía dos riesgos: uno, legitimación; dos, costos políticos.

desmovilización de sus huestes y el rechazo al tráfico de drogas. En segundo lugar, como hemos sostenido, debido a la pérdida de valor estratégico de las AUC gracias al fortalecimiento de las FF.AA. en los últimos seis años, por lo cual se ha reducido su dependencia estratégica hacia los grupos paramilitares para el control territorial. Finalmente, ante esta pérdida del valor contrainsurgente de las AUC, la relación costo-beneficio de la persistencia de las autodefensas va en claro detrimento de las instituciones estatales: el daño nacional e internacional a la imagen del Estado y a la oficialidad de las FF.AA. por sus relaciones con estos grupos es mayor que los beneficios actuales de su participación en la guerra contrainsurgente.

No se va a tratar, sin embargo, de una negociación fácil. Dadas las fronteras ambiguas entre la dimensión política contrainsurgente de los grupos paramilitares y sus vínculos profundos con el tráfico de drogas, las negociaciones se van a mover en un campo minado. Pero nadie duda que una eventual desmovilización de las AUC traería enormes beneficios para el país. De un lado, se sortearía una inevitable descomposición bandoleril de esos grupos como ya se puede observar en muchas zonas del país; de otro lado, se podría recuperar y fortalecer la legitimidad estatal al acabar de tajo sus dudosos vínculos con estos grupos criminales, habría una disminución de la tasa de homicidios y una mejoría en los registros de derechos humanos; finalmente, se obligaría al Estado a garantizar la seguridad pública y privada sin el acompañamiento de grupos de justicia al margen de la ley.

Pero, probablemente, el impacto más deseable podría producirse con relación al proceso de paz con los grupos guerrilleros, ya que una eventual desaparición de las AUC permitiría crear un clima de confianza mayor, en tanto que los eventuales riesgos de retaliaciones brutales desaparecerían en gran medida. Esta fue la experiencia en El Salvador con el desmantelamiento de los tenebrosos “escuadrones de la muerte”. Este hecho constituyó

una condición previa y necesaria para el inicio en serio de las negociaciones de paz con el FMLN.

Ejército de Liberación Nacional

El debilitamiento estratégico del ELN es cada día más pronunciado. No sólo su capacidad militar ha sufrido una mengua profunda, sino, incluso, su credibilidad política. Si hace solamente pocos años Alemania fue el escenario de importantes encuentros de paz entre este grupo y miembros influyentes de la sociedad civil colombiana, durante el año 2004 por iniciativa del propio gobierno alemán el ELN fue incorporado a la lista de grupos terroristas de la Unión Europea.

Ante este oscuro panorama las opciones de supervivencia del ELN se fueron encogiendo de manera dramática. La opción de persistir en la guerra es insostenible, pues sus debilitados frentes de guerra están siendo absorbidos por las FARC en algunas regiones y por las AUC en otras, como ocurrió en la conflictiva ciudad petrolera de Barrancabermeja. Por ello, sólo le quedan dos opciones reales: una integración con las FARC o una negociación política con el Estado.

La perspectiva de integración con las FARC en términos de igualdad -tal como ocurrió con el FMLN en El Salvador o la URNG en Guatemala que, en cada caso, fue el resultado de un encuentro de cuatro grupos guerrilleros que pasaron a conformar un Estado Mayor Conjunto-, no es posible debido a la tradición hegemónica de las FARC. Este grupo no acepta integraciones, sino absorciones pasivas y subordinadas. Es impensable que el Secretariado de las FARC acepte la incorporación del Comando Central del ELN (COCE) a sus rangos en términos equitativos, con la fusión de ambas direcciones en un Estado Mayor Conjunto.

Frente a una situación tan difícil, al ELN no le queda más que una salida negociada para su inserción en la vida política. El fortalecimiento de un polo de

izquierda democrática en Colombia -al igual que en el resto de América Latina -, crea un espacio para que este grupo guerrillero pueda hacer el tránsito de las “armas a la política” sin mayores traumatismos. Este es, a mi modo de ver, el único y más deseable escenario para el ELN si no quiere terminar en una descomposición interna o en una fusión subordinada a las FARC.

Por ello, la propuesta de Álvaro Uribe al gobierno mexicano para llevar a cabo un papel activo en un futuro proceso de negociación con el ELN, así como la rápida aceptación tanto del presidente Vicente Fox como del Comando Central de esta organización, ha abierto un margen para el optimismo en Colombia.

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP)

La poderosa onda expansiva de las FARC ha comenzado a revertirse en los últimos dos años. A mediados de los años noventa esta organización insurgente dio un salto estratégico que cogió desprevenidas a las Fuerzas Armadas, las cuales sufrieron los peores retrocesos militares en toda su historia. Este salto consistió en el paso de la guerra de guerrillas a la guerra de movimientos, mediante la cual las FARC cercaron y aniquilaron en el sur del país unidades de élite del Ejército.

Las Delicias, San Juanito, Patascoy y El Billar se convirtieron en los símbolos de la “revolución estratégica” que llevaron a cabo las FARC durante el débil gobierno de Ernesto Samper. Esta ventaja táctica desapareció, sin embargo, a partir de 1998. Bajo el impacto del Plan Colombia y un fuerte esfuerzo financiero del Estado colombiano, las FARC perdieron la iniciativa táctica y desde esa lejana fecha no han podido volver a llevar a cabo ninguna acción de significación estratégica. Por el contrario, ante la superioridad aérea, fluvial y terrestre de las Fuerzas Armadas se vieron obligadas a volver a la guerra de guerrillas, es decir, al método de lucha que

han practicado durante cuatro décadas sin ningún éxito.

Considerando esta derrota estratégica las FARC intentaron combinar las acciones guerrilleras con los actos terroristas urbanos. La explosión de un carro-bomba en el Club El Nogal en Bogotá, en la cual murieron decenas de civiles, constituyó la experiencia piloto, con consecuencias trágicas para el propio grupo insurgente. En un clima internacional de horror hacia el terrorismo, esta modalidad de acción solo le significó a las FARC un rechazo que ahogó las pocas simpatías que poseía en segmentos de la opinión pública nacional e internacional. Múltiples santuarios de esta agrupación en distintos países del mundo (tales como México o Suiza) se cerraron de golpe.

Desde mi perspectiva, las acciones brutales de Al Qaeda sepultaron el terrorismo de otros grupos similares -en cuanto hace a los métodos de acción- en Occidente. Así como es poco creíble que ETA pueda retomar la vía terrorista en una España horrorizada con el 11 de marzo, igualmente es poco creíble que las FARC puedan utilizar esta herramienta de acción sin mayores costos internos e internacionales. En pocas palabras, el grupo guerrillero se está quedando sin opciones estratégicas viables.

En conclusión

Así pues, el conflicto armado en Colombia ha sufrido un punto de inflexión a partir de 1998 en claro detrimento de los actores armados no estatales. ¿Se podrá consolidar este proceso a favor de la paz?

A mi modo de ver, si bien los grupos irregulares han comenzado una etapa de retroceso e, incluso, de descalabros significativos tanto en el plano político como militar -pues tanto el tiempo nacional como el internacional corre en contravía a sus aspiraciones-, el conflicto armado está afectando igualmente a las élites del país. Según el Departamento Nacional de Planeación, el país pierde, año tras año,

dos puntos del PIB como consecuencia de la violencia, es decir, alrededor de 1.800 millones de dólares anuales. Por ello, Colombia se está acercando rápidamente a lo que los expertos en resolución de conflictos denominan un “empate mutuamente doloroso” (*mutual hurting stalemate*)¹¹. Según esta noción, un conflicto entra en un período favorable para su solución negociada cuando existe un reconocimiento compartido entre todos los actores enfrentados de la imposibilidad de alcanzar una victoria por la vía militar, por lo cual su persistencia tiene costos profundos para unos y otros actores. Esto fue lo que ocurrió tanto en El Salvador como en Guatemala en circunstancias muy disímiles. En el primer caso, con una guerrilla intacta que, sin embargo, había perdido su retaguardia estratégica con la derrota de los sandinistas en las

elecciones de 1990, que llevaron al poder a Violeta Chamorro. En el segundo caso, con una guerrilla brutalmente debilitada. Pero, en uno y otro caso, la persistencia de la confrontación armada imposibilitaba a las élites guatemaltecas y salvadoreñas generar un clima de seguridad interna necesaria para su inserción positiva en un mercado globalizado.

Por ello, en una y otra nación, tanto la persistencia de la insurgencia como el mantenimiento de un costoso aparato de contrainsurgencia eran catastróficos para ambos bandos. Lo mismo está ocurriendo en Colombia. La guerra ya no es sostenible para la guerrilla. Pero, tampoco lo es para las élites en el poder.

11 ZARTMAN, William. “Ripeness: The Hurting Stalemate and Beyond”. En: Stern Paul y Druckman Daniel. (eds.). *International Conflict Resolution after the Cold War*. Washington: National Academy Press, 2000.